

XXXV JORNADAS ACADÉMICAS DE COLPROBA

Comisión de derecho Civil y *Comercial*

Tema: Cambios introducidos por el DNU 70/23 en el control judicial de los contratos

Subtemas: Inconstitucionalidad del DNU, orden público, libertad de contratación, interpretación judicial, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica.

Autora: Dra. Julieta Tavernese

Matrícula CALM T° 13 F° 38

Teléfono +541168605598

Dirección: Güemes 5150, Caseros.

Correo: Drajulietatavernese@gmail.com

SUMARIO: En el presente se analiza como la nueva letra de los arts. 958 y 960 del CCYC introducida por el DNU 70/23 restringe la facultad de los jueces de sanear contratos lesivos, abusivos o viciados en su causa, derivando en nulidades que podrían generarles perjuicios a ambas partes, motivo por el cual se propone declarar la inconstitucionalidad de dichos artículos.

INCIDENCIAS DEL DNU 70/23 EN EL CONTROL JUDICIAL DE LOS CONTRATOS, INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA Y PROHIBICIÓN DE INTEGRAR

Dentro del título II del Código Civil y Comercial de la Nación, en el capítulo que refiere a los aspectos generales de los contratos, el decreto de necesidad y urgencia modifica con sus artículos 252 y 253, aspectos importantes en cuanto a la libertad de contratación, la determinación del contenido y su control judicial.

Respecto a la libertad de contratación y la determinación del contenido, la nueva redacción del artículo 958 del CCCyC reza: *Libertad de contratación. Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley o el orden público. Las normas legales siempre son de aplicación supletoria a la voluntad de las partes expresada en el contrato, aunque la ley no lo determine en forma expresa para un tipo contractual determinado, salvo que la norma sea expresamente imperativa, y siempre con interpretación restrictiva.*

Esta implica un cambio sustancial en cuanto a los límites a la autonomía de la voluntad, toda vez que suprime de la redacción anterior a la moral y las buenas costumbres, fuentes del derecho que siempre tuvieron principal relevancia en el derecho contractual e influyen en el objeto del mismo, opinión compartida por la gran mayoría de juristas doctrinarios.

Asimismo, la influencia de este artículo pasa a extenderse al art. 959 del CCyC, siendo que la moral y las buenas costumbres -muchas veces vinculadas al principio de buena fe, pero sin traerla necesariamente aparejada- son puestas en consideración por la autoridad jurisdiccional en la interpretación literal y los alcances del contrato, toda vez que el mismo constituye ley para las partes y debe ser cumplido, salvo modificación o extinción por mutuo acuerdo o causas excepcionalmente previstas por ley, entre las que ya no son parte las fuentes antes mencionadas.

En adición, el mismo artículo introduce una referencia al rol de la ley en las estipulaciones contractuales, reafirmando que es de aplicación supletoria a la voluntad de las partes, con la salvedad de que esa norma explícitamente prevea su aplicación por

sobre la voluntad de las partes y su aplicación derive de una interpretación restrictiva; dejando de esta forma escaso o nulo margen para la inmiscusión de la ley, sin importar el fin de la misma, en los acuerdos entre partes.

La modificación del artículo 960 está vinculada a la intervención judicial en aquello pactado por las partes. El presente establece *que los jueces no tienen facultades para modificar las estipulaciones de los contratos, excepto que sea a pedido de una de las partes cuando lo autoriza la ley.*

Esto resulta polémico siendo que le quita a los jueces la facultad de modificar de oficio conforme a su iura novit curia un contrato que manifiestamente altere el orden público. Resulta necesario recordar que previa a la sanción del nuevo código, no existía tal posibilidad, sino una mera adecuación a pedido de parte con motivos de lesión o imprevisión.

La redacción anterior del artículo 960 implicaba para doctrinarios como Rivera y Medina, una atribución excepcional a los fines de impedir una ilegitimidad, y de ninguna forma dicha intervención podía consistir en obligaciones forzosas aplicadas por la autoridad a un acto que, en principio, fue consentido por ambas partes involucradas.

De dicha interpretación emana el criterio de que la modificación o adecuación judicial de un contrato no tiene como finalidad limitar la voluntad de las partes per-sé, sino velar por que su cumplimiento se de forma tal que no implique abusos de derecho ni afecte de forma grave y manifiesta los derechos patrimoniales de las partes intervinientes.

No obstante, vale la pena destacar que -sin perjuicio de que el fin último de estas modificaciones sea que los sujetos ejerzan sus derechos con libertad plena- el ordenamiento jurídico argentino en su base constitucional (arts 14, 16, 17,19, 28, 75 inc 12, entre otros) establece limitaciones a la libertad o autonomía de la voluntad, a los fines de que dichos derechos se ejerzan de forma tal que no provoquen daños a sus involucrados, a terceros, ni se vean afectados intereses de orden público. Revocar por decreto de necesidad y urgencia estas limitaciones que hacen no a un capricho legislativo sino a una tutela judicial no representa otra cosa más que una violación a los

derechos constitucionales de propiedad y reserva, y a las garantías de tutela judicial efectiva, equidad y razonabilidad.

Vale la pena aclarar que de ningún modo se pretende con el presente análisis restringir la libertad contractual de las partes, ni mucho menos generar inseguridad jurídica. Simplemente reflexionar sobre las posibles herramientas de las que puedan valerse tanto los magistrados como los auxiliares de justicia en el contexto de un estado de derecho que en su intención de pregonar las libertades individuales y reducir la inmiscuencia del Estado, omite garantizar la igualdad material ante la ley generando brechas de negociación, que a su vez resultan en vicios de la voluntad contractuales.

Para concluir, se resalta la importancia del control de constitucionalidad; toda vez que la declaración de inconstitucionalidad desde el caso Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ DyP (CSJN, 2012) es considerado un deber judicial, que se caracteriza por ser difuso en tanto cualquier órgano jurisdiccional puede declarar, -de oficio o a petición de la parte interesada- la inconstitucionalidad de cualquier tratado, decreto o ley.

CONCLUSIÓN

Por todo lo expuesto, quien analiza propone la declaración de inconstitucionalidad de los nuevos arts. 958 y 960 y la aplicación de su redacción anterior como el posible remedio que resulta ya no excepcional sino necesario, que ante casos de manifiesta naturaleza lesiva, fraudulenta o abusiva de un contrato, los magistrados puedan ejercer dicha facultad, a los fines de sanear dicho contrato.

Ello, en pos de que el acto entre partes no quede nulo, ni tampoco signifique una intromisión entre lo pactado por los sujetos de derecho, sino de que el mismo pueda ejecutarse conforme a derecho y, como indica el principio general, ser cumplido.